

DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

BOLETIN BIMESTRAL - Año 1 - OCTUBRE 2003

1

**Proyecto "RELACIONES CIVIL - MILITARES" PUCE.
FUNDACION: DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA**

El Boletín "Defensa, Seguridad y Democracia" que a partir de esta fecha se editará bimestralmente, pretende ser un nuevo instrumento de información y análisis especializado, dirigido a investigadores, políticos, comunicadores, administradores del Estado y miembros de la Fuerza Pública, que requieren de herramientas conceptuales para formarse opinión frente a temas como las Políticas de Defensa, Seguridad, Fuerzas Armadas, su conducción y control democrático.

Convencidos de que nuestro país debe garantizar su presencia internacional por la fortaleza del Estado Social de Derecho que se traduce en eficacia, representación y legitimidad de sus instituciones, compartimos esta inquietud con instituciones y colegas iberoamericanos que miramos estos procesos desde la perspectiva de las naciones no hegemónicas.

Además de Fuerzas Armadas y Policía existen otras instituciones que deben participar, con igual o mayor responsabilidad, en la construcción y mantenimiento de un Sistema de Defensa y Seguridad Nacional estrictamente democrático. Nuestra Constitución actual señala que "en el conjunto de las instituciones del Estado descansa la responsabilidad de la seguridad nacional, de su orden interno y de su independencia y unidad". Esto significa una compleja relación y entendimiento, un proceso permanente y perfectible de mutua complementariedad e interlocución entre los distintos actores institucionales corresponsables de las funciones de defensa y seguridad.

Bases jurídicas sólidas deben sostener el andamiaje de la Seguridad Ciudadana y la conducción, desde el Ministerio de lo Interior, de las fuerzas de seguridad (Policías). La Defensa es un instrumento valioso de la política exterior del Estado, por lo que argumentos políticos consistentes deben liderar las relaciones y las tesis de negociación con otros estados, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es imprescindible la acción del Congreso Nacional, en la delimitación de las misiones fundamentales de la Fuerza Pública, en el constante perfeccionamiento de la legislación pertinente, en el acucioso control y fiscalización de las acciones del poder ejecutivo que tienen que ver con las actividades de la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa debe tener la capacidad de representar la autoridad política ante las Fuerzas Armadas, y las estructuras adecuadas para hacerlo, liderando un urgente proceso de modernización. Es interés del Boletín proporcionar datos, elementos de juicio, resultados de investigación y materiales de análisis para apoyar estos procesos.

Por último, el público ecuatoriano, general o especializado, requiere conocer mejor a la Fuerza Pública, sus misiones, su organización y desafíos. Por ello también es nuestro interés ofrecer notas destacables de las Instituciones, en cada edición Bimestral del BOLETÍN.

CONTENIDO

¿Responde la Constitución a las nuevas realidades geopolíticas del Ecuador?

Dr. Edgar Terán Terán **Pag.2**

Defensa y Seguridad Mundial.

Dr. Louis Goodman **Pag.3**

El Debate Sobre la Transición Jurídica en la Democracia Española

Dr. Gustavo Suárez Pertierra **Pag.4**

La Doctrina de la Seguridad Nacional y la Constitución Actual

Dr. Marco Granja **Pag.5**

OPINIÓN PUBLICA

Market **Pag.6**

Foros sobre Temas de Defensa y Seguridad, con el Congreso Nacional

Pag.7

Proyectos de Ley relacionados con Fuerzas Armadas, en Trámite Legislativo. **Pag.8**

Notas Destacables de las Fuerzas Armadas:

Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) **Pag.9**

Cronología Fuerzas Armadas-Sociedad

José Castro Sotomayor **Pag.10**

¿Responde la Constitución a las nuevas realidades geopolíticas del Ecuador?

Edgar Terán Terán*

“En la Asamblea Constitucional de 1998 se introdujeron reformas a la Constitución de 1978 (redactada y aprobada bajo la tutela de la dictadura militar). Las reformas se refirieron sobre todo a Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. La estructura del Estado quedó intocada y en ese sentido la Asamblea Nacional no cumplió su papel en una reforma institucional más profunda. Si es que en el día de hoy queremos avanzar en esa tarea, debemos hacer dos consideraciones: 1) atender a los aspectos más importantes de las normas que tienen vigencia sobre la fuerza pública, que chocan con el nuevo texto constitucional; y 2) completar otras reformas, incluso algunas constitucionales, para que la Fuerza Pública tenga la modernidad necesaria en este tercer milenio.

Sobre normas constitucionales vigentes, quiero mencionar dos: la definición - que también está en la Constitución española- de que la fuerza pública es obediente y no deliberante. Esta es una postura moderna del derecho constitucional, que ha reaccionado con claridad frente a las dictaduras militares institucionales que América Latina vivió entre las décadas del 60 y 70, cuando las FFAA asumieron la tarea de gobernar ante lo que calificaban de “fracaso de los políticos”. La norma constitucional que dispone que militares y policías sean obedientes y no deliberantes, es fundamental para un orden civil. No se puede ejercer administración civil si no se delibera; y si la Constitución manda que la fuerza pública no sea deliberante, es obvio que le impide cualquier ejercicio de jurisdicción civil en la administración del Estado.

Atender debidamente a las normas es esencial cuando, a comienzos de este Siglo XXI, nos enfrentamos con realidades innegables. Los viejos Estados del Siglo XX, están siendo derrotados por su incapacidad de cambiar frente a la globalización. En la medida en que Ecuador retarde el momento de modernizar sus instituciones, el costo será enorme.

Esto es importante, sobretodo para la institución militar, porque sus parámetros de educación y formación no están adecuados a las nuevas realidades. Ellos tienen que advertir que las viejas teorías se rompieron, y que es urgente acomodar la organización de la fuerza pública, la economía - el Estado en general- a un sistema de producción y organización política que incremente las capacidades de la sociedad.

Otro aspecto fundamental de la reforma del sistema de la fuerza pública es la profesionalización de las FFAA. Creo que el caso español es útil. Todos los grandes ejércitos del mundo son ejércitos profesionales -el ejército de los EEUU, el ejército inglés-. Y acá, en el Ecuador el ejército tiene que ser profesional. Para eso hay que cambiar muchas normas. Es absolutamente injusto, frustrante y antieconómico, que la permanencia en la vida militar sea tan corta; que un general del Ejército o de la Policía tengan que pasar a retiro cuando está en su plenitud intelectual y en su mayor rendimiento

dada la educación que han recibido del Estado.

Para atenuar esa violencia, nuestras FFAA han encontrado la peor solución posible que consiste en organizar empresas monopólicas para que los militares retirados encuentren colocación. Tiene que ocurrir que el militar viva con los recursos presupuestarios necesarios dotados por el Estado para mantener un nivel de vida correspondiente a su rango.

El último punto de acomodación a la Constitución es el de la Unidad Jurisdiccional y es en la fuerza pública donde está el principal problema. No es que la fuerza pública sea la única que se sustrae preferentemente a la Unidad Jurisdiccional; en el Ecuador hay muchísimos otros rubros de la justicia que son sistemas de justicia administrativa, en los que quienes ejercen jurisdicción no conocen siquiera de derecho: como ejemplo, los jueces de impuestos, los jueces de menores. Para ser juez hay que saber derecho, ser abogado, cumplir requisitos de ejercicio profesional y tener la mejor fama posible. Si es que se escogen candidatos de la justicia militar o de la justicia policial, eso no se opone a la Unidad Jurisdiccional, pero sí que se opondría el que se pretendiera que los jueces sean militares o policías y no abogados.

La Constitución ecuatoriana es perversa porque desvirtúa la función jurídica. El campo de acción de los partidos políticos es muy importante; ellos son los grandes jugadores del proceso democrático, pero no se puede admitir que los jueces sean afiliados a un partido político, que tengan ideología que prevalezca sobre la aplicación recta de la ley. Es necesario que se haga una reforma constitucional al respecto.

El concepto jurídico de las Ley Orgánica de la Policía es improcedente porque no es posible concebir una Policía Nacional autónoma. La policía tiene que estar bien sujeta al poder civil a través del Ministro del Interior. No puede estar gobernada a sí misma por un Consejo de Generales, como ocurre en la actualidad. La Policía Nacional debe ser parte de la fuerza pública, como dice la Constitución, obedecer a los altos fines del Estado, y estar absolutamente supeditada al poder civil. Aquello de tener una disciplina estricta, casi heroica, y no deliberar, sino obedecer, es algo de lo que hace la grandeza del militar y del policía. La grandeza no se logra a través de la intromisión en las tareas civiles, o en la administración pública que, dirigida por órganos jerarquizados y que manejan armas, son los peores sistemas para garantizar la libertad de los seres humanos. La profesionalización de la fuerza pública tiene que caminar por estas nuevas vertientes constitucionales”

***Dr. En Jurisprudencia. Presidente de la “Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley”. Este texto es un resumen de la Ponencia dictada por el autor en el Seminario: Orden Jurídico, Defensa y Seguridad”, PUCE, Junio 9, 2003. Para leer el texto completo visite nuestra página Web: www.dsdpuce.org.**

DEFENSA Y SEGURIDAD MUNDIAL

Louis Goodman*

Vivimos en un mundo con un sistema de seguridad internacional, basado en las Naciones Unidas, diseñado casi sesenta años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las innovaciones tecnológicas: teléfonos celulares, computadoras personales, viajes comerciales por aviones jet y tarjetas de crédito de plástico no existían cuando el sistema internacional de seguridad fue formado. Estas se multiplicaron en todos los espacios; mientras que el sistema de seguridad mundial ha permanecido casi invariable desde entonces. Siendo precario cuando se inauguró después de la Segunda Guerra Mundial, propició una era de paz cimentada en el balance estratégico entre dos superpoderes, los EEUU y la Unión Soviética, frente a una perspectiva de destrucción mutua asegurada.

Pero la carrera armamentista que propició la confusión ideológica a la que condujo, dejó un saldo de eficacia relativamente negativo. Desde los años noventa este sistema no es mejor. Ruanda, Bosnia, Kosovo, Chechenia, ejemplifican la precaria respuesta del sistema internacional de seguridad a la conflictividad mundial. Hoy en día, se mantiene el mismo sistema formal de seguridad, pero el sistema informal es distinto porque hay un solo superpoder, los EEUU, que tiene el desafío de mantener y garantizar sus intereses y de sus aliados en un mundo infinitamente más complejo.

Después del 11 de septiembre del 2001, los USA fueron percibidos como la potencia atacada, generándose una ola de simpatía global y fuertes alianzas con países que hasta hace poco eran enemigos de los EEUU. Pero cuando inició la guerra contra el terrorismo primero en Afganistán, luego en Irak, sin el apoyo de la ONU, surgieron grandes controversias sobre la legitimidad de sus acciones. Hoy en día, es evidente, que se han ampliado las brechas entre los EEUU y muchos de sus antiguos aliados.

Se puede encontrar diferencias entre la política del Presidente George W. Bush con la del gobierno de Bill Clinton con respecto al tema. La política de seguridad internacional de Bill Clinton, no estaba basada en la teoría de la amenaza; más bien estaba dirigida a ensanchar el ámbito de las alianzas, configurándose como una política positiva, multilateral. La política de Bush está basada en el temor, en la reacción contra amenazas. Eliminar amenazas, contando de preferencia con muchos aliados. Pero si los aliados no reaccionan en la misma dirección, ha optado por defender los intereses de los USA, actuando unilateralmente o con un grupo reducido de aliados, como en el caso de Irak, con resultados muy distintos de los que se podía esperar de la política exterior de su antecesor.

Se puede pensar que esta es una nueva política de seguridad de los EEUU, pero no lo es. Esta política no fue formada después del 11 de septiembre del 2001. Realmente surgió en 1992 después de la Guerra del Golfo Pérsico, siendo George Bush padre el Presidente; cuando Richard Chaini, actual Vicepresidente, fue Ministro de la Secretaría de Defensa. Sus asesores principales fueron Paul Gofubuts, actual Secretario de Defensa y diputado, y

Collin Powell, en actividad militar en ese entonces. Basándose en la pregunta de ¿cómo pueden los EEUU en el futuro asegurar sus intereses como nación? Formularon respuestas que publicaron en un documento del Departamento de Defensa en el año 1992, en el cual se identificaron posibles amenazas (por ejemplo una futura) al poder de los EEUU y sus aliados, y se formularon ciertas estrategias. Muchos recordarán aquella del escudo contra misiles, que fue parte de la administración de Bush padre y que iba a ser parte de la estrategia de la administración de Bush hijo. Todo cambió cuando los trágicos eventos del 11 de septiembre del 2001 ocurrieron. La amenaza principal para los intereses de los EEUU y sus aliados, ya no es aquel conjunto identificado hace diez años en los documentos del Departamento de Defensa, que incluían la estrategia y la estructura de seguridad mundial determinadas por el único superpoder sobreviviente. Ahora, la amenaza principal es el terrorismo, no solamente el fundamentalismo islámico, sino cualquier terrorismo que pueda ser una amenaza a los EEUU, especialmente un terrorismo que puede usar armamentos de destrucción masiva.

Tan convencido estaba Bush de la existencia de amenazas muy visibles en el mundo, que quedó sorprendido del resultado de la votación a la segunda Resolución de la ONU, antes de la invasión a Irak y del distanciamiento de sus antiguos aliados desde la campaña de Afganistán.

Para cualquier país no participante en el juego de las alianzas hegemónicas en este momento, resulta importante preguntar: ¿Cómo se hacen alianzas para garantizar la seguridad nacional dentro de este contexto?. En América Latina, con la elección de Néstor Kirchner se avisa una alianza regional, entre Brasil, Argentina, Chile y posiblemente otros países. Esto es importante porque se tiene que tomar en cuenta que a pesar de que haya un sistema de seguridad internacional, también hay sistemas de seguridad regionales y estos son la base sobre la cual el sistema mundo está construido.

La convivencia entre poderes dominantes y poderes regionales más limitados, entra perfectamente dentro de las perspectivas de la construcción del sistema mundo actual, si es que el basamento jurídico de los estados es lo suficientemente sólido como para sostener alianzas que tiendan a garantizar los derechos de los estados y de sus ciudadanos en un mundo plural. Esto es, mantener una política internacional, un sistema de cooperación regional, en un contexto tan complejo requiere de instituciones, fuerzas armadas, ministerio de Relaciones Exteriores, sólidamente constituidas y cimentadas en el lugar que les corresponde en el conjunto de las instituciones del Estado de Derecho.

Este texto es un resumen de la Ponencia dictada por el autor en el Seminario: Orden Jurídico, Defensa y Seguridad”, PUCE, Junio 9, 2003. Para leer el texto completo visite nuestra página Web: www.dsdpuce.org.

***Sociólogo. Decano de la Escuela de Servicio Internacional/American University. Wash. .DC. Asesor Internacional del Proyecto Relaciones Civil-Militares PUCE.**

EL DEBATE SOBRE LA TRANSICIÓN JURÍDICA EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA *

Dr. Gustavo Suárez Pertierra, ex Ministro de Defensa de España y actual Director del Instituto Gutiérrez Mellado

El Dr. A Gustavo Suárez Pertierra analizó el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas en el contexto de la nueva Constitución española, de 1980.

Empezó por definir este proceso como “el conjunto de acciones dirigidas a ubicar a los ejércitos de aire, mar y tierra, en el lugar que les corresponde dentro del conjunto de las instituciones del Estado”.

El primer hito de este proceso fue la reforma de la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, realizada en 1984. Esta ley, tuvo el propósito de distribuir las competencias sobre Defensa Nacional entre los diferentes órganos del Estado. Como resultado se tuvo un sistema general de la Defensa. Dentro de él se empezaron a configurar las competencias del Legislativo. Este comenzó a realizar un cierto control, leve al principio, de la acción de las Fuerzas Armadas a través del control al gobierno y de la asignación del Presupuesto. Dentro de la nueva Constitución, las autoridades del Ejecutivo, especialmente el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, se constituyen como órganos unipersonales con competencias específicas en la materia.

Aparece la figura de Jefe del Estado Mayor de la Defensa como principal colaborador del Ministro en los aspectos militares. Por último, pero con especial importancia, se diseñaron los órganos colegiados (uno de los cuales, llamado Junta de Jefes de Estado Mayor, que tenía hasta entonces el mando supremo de las Fuerzas Armadas) pasaron a ejercer labores deliberantes, consultivas y de asesoramiento.

La parte nuclear del proceso estuvo constituido por la definición de las misiones de las Fuerzas Armadas. Este era un aspecto especialmente delicado, pues se trataba de restringir el campo de acción de las Fuerzas Armadas, impropriamente ampliado mediante la asignación de funciones que no son de carácter militar. Esto es, se trataba de recuperar la naturaleza propia de las Fuerzas Armadas, como institución especializada en la función de la defensa. La secuencia de acciones llevada a cabo, podrían expresarse de la manera siguiente:

a) Se estableció una clara distinción entre labores policiales y labores militares. La “Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en 1986 reorganizó los cuerpos policiales: uno de naturaleza estrictamente civil, la Policía Nacional; otro sometido a disciplina militar pero que emplea métodos y medios policiales, la Guardia Civil.

b) Reforma de la justicia militar. El sistema militar de justicia español tenía (en la época de la dictadura franquista) una extensión extraordinaria, pues atribuía a los Tribunales Militares el conocimiento de los delitos cometidos por militares, cualquiera fuese su naturaleza; los delitos en que el sujeto pasivo fuera un militar, es decir, los cometidos contra militares aunque los autores fueran civiles; y los delitos cometidos en establecimientos militares. Incluso el Código Penal militar tipificaba los delitos contra el orden público como delitos de carácter militar.

Este proceso de reforma duró toda la década de los años ‘80, a

través de la expedición de cinco grandes leyes que permiten definir delitos militares, distinguir entre delitos y faltas disciplinarias (elemento muy importante para que los mandos militares puedan conducir de una manera inmediata la disciplina en los ejércitos) e integrar –como manda la Constitución– la justicia militar en el poder judicial único del Estado por medio de un procedimiento específico.

c) Para la definición de las misiones de las Fuerzas Armadas era prioritario determinar los objetivos de la Defensa Nacional. En 1984, comenzó un debate parlamentario, el primero sobre política de defensa en el que se alcanzaron definiciones más bien de carácter general sobre objetivos y acciones., pero que sentó la idea básica del proceso, que es el abandono de la idea de defensa interior y de ocupación del territorio como fundamento de la misión de las Fuerzas Armadas.

A partir de aquí y fundamentalmente desde que en 1992 se da un nuevo paso en la definición de los objetivos de la Defensa, los ejércitos quedan orientados a la defensa frente a la agresión exterior, la defensa del orden constitucional y la colaboración con los ejércitos extranjeros. Para entonces, España ya había ingresado en la OTAN y habían irrumpido nuevas misiones para los ejércitos.

La ruptura del aislamiento. La clave que permitió la ruptura del aislamiento de la defensa española con respecto al resto de Europa, estuvo dada por el ingreso de España a la OTAN, que se produce en 1981 y no por razones de política de defensa, sino por la presión ante la necesidad de integración en las instituciones europeas para la modernización de España. La toma de conciencia sobre el valor de la integración en la OTAN (hay que anotar que las fuerzas políticas más importantes, el Partido Popular y el PSOE, en un principio no estuvieron de acuerdo básicamente con el Proyecto) no se produjo plenamente sino hasta 1986 cuando se realiza el referéndum en el que la sociedad española en su conjunto se pronunció positivamente por la integración. La integración dio paso a un nuevo modelo de relaciones con Estados Unidos, que pasó de la asistencia militar a un modelo de cooperación asistencial. En 1988 se produce la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea Occidental.

Proceso de construcción de una administración de lo militar homologable y eficaz. Una vez definidos los objetivos de la defensa nacional y las misiones de las Fuerzas Armadas en una sociedad moderna, el instrumento imprescindible para la aplicación y control de los diferentes procesos es una administración integrada, estable y unitaria de la Defensa, es decir, la construcción de un Ministerio de Defensa imbricado en la Administración General del Estado.

Antes de 1977 en España existían tres ministerios militares. En 1977 se creó un solo Ministerio que tan solo era una yuxtaposición de los antiguos. A partir de 1984 se acomete un esfuerzo continuado por instalar un Ministerio Civil de la Defensa como un instrumento orgánico potente, para emprender los procesos básicos de la reforma: a) el redimensionamiento y la profesionalización de los ejércitos, b) la puesta en marcha de programas de dotación de material,

en especial los grandes programas plurianuales ligados a sistemas de compensación, c) la elaboración de la doctrina de acción conjunta d) la reforma de la enseñanza militar o la completa ordenación de la carrera militar de acuerdo a criterios profesionales, que se acomete mediante una Ley de la Función Militar en 1989. Desde 1986 España está incorporada a la OTAN y a partir de 1988 las Fuerzas Armadas españolas participan activamente en las nuevas misiones encomendadas por los organismos internacionales: al servicio de Naciones Unidas en la misión de verificación de la paz en Angola; en misiones humanitarias de carácter internacional, entre ellas Centro América, la antigua Yugoslavia.

Al finalizar su intervención el Dr. Suárez Pertierra expresó su deseo de hacer una breve reflexión fruto de su experiencia en la modernización de las Fuerzas Armadas españolas, que podría servir de un relativo ejemplo (considerando las diferencias nacionales) para otros estados democráticos. Dijo que en su criterio, la clave del éxito en un sistema de incorporación política normalizada de las Fuerzas Armadas a la sociedad, es la puesta en marcha de proce-

sos decididos que permitan la imbricación de la organización militar en el conjunto de las instituciones del Estado. Esto tiene que ver con la elaboración de disposiciones legales de diferente nivel, con la fijación de programas de acción globales y sistemáticos, con la determinación continuada de los ritmos que deban aplicarse y con la definición de las misiones de las Fuerzas Armadas en una sociedad moderna, desechando aquellas que no se corresponden con su naturaleza. Para ello un instrumento imprescindible es la creación de una organización administrativa adecuada (un Ministerio Civil de la Defensa) y un punto de apoyo muy importante es la conexión con las organizaciones internacionales y con los ejércitos de otros países, así como la participación en nuevas misiones de carácter compartido”.

Resumen preparado por Bertha García Gallegos.

*** Ponencia presentada en el Seminario “Orden Jurídico, Defensa, Seguridad y Democracia” realizado en Quito el 9 y 10 de junio del 2003.**

LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONSTITUCIÓN ACTUAL

Marco Granja*

La doctrina de la seguridad nacional corresponde a un período conocido como la Guerra Fría, consecuencia de la bipolaridad política y económica que existió hasta la caída del muro de Berlín. La Fuerza Pública, entonces fue ubicada en el contexto de un Estado que debía asegurar un grado de protección a sus ciudadanos, frente a las amenazas internas y externas. Lo interno había inspirado una represión de corte anticomunista que en otros países causó un incontable número de muertos.

Las circunstancias en el país y en el mundo han cambiado drásticamente desde entonces. En ese contexto, resulta un anacronismo mantener la misma doctrina que era adecuada para una amenaza interna, entre fuerzas militares regulares y entre éstas y una subversión de inspiración política que, buscaba también el apoyo de la población, procurando mantener su lucha, en niveles que no afecten sino a las fuerzas e instalaciones oficiales.

Concomitantemente, las Constituciones anteriores a las de 1998 y en concreto, aquella vigente desde 1979, con el advenimiento del régimen democrático, conservaba un régimen de limitación de garantías constitucionales que solo enumeraba taxativamente aquello que no podía hacer el órgano público (vida, integridad, no confinamiento y no extradición), quedando implícito que todo lo demás era permitido, en circunstancias de estado de emergencia. El régimen de Sixto Durán volvió al esquema inverso y de lógica jurídica, citando expresamente qué puede hacer la autoridad publica. La Constitución de 1998 terminó por consagrar un régimen que equilibra la relación poder del Estado y las garantías constitucionales de los individuos y los mecanismos eficaces para preservar tales garantías.

Pero ahora el país enfrenta una realidad diferente. Las hipótesis de conflicto internacional clásico han disminuido considerablemente su grado de probabilidad, en tanto que el abanico de amenazas

comprende entre otros, los desequilibrios financieros y una deuda externa que asfixia la multitud de necesidades insatisfechas de la población.

LA CONSTITUCIÓN VIGENTE DESDE EL 10 DE AGOSTO DE 1998.

Relacionado con la Seguridad y la Fuerza Pública, la Constitución introdujo diversas variantes:

En el Art. 15 generaliza al mismo tiempo que flexibiliza los derechos de los extranjeros, quienes no podrán adquirir, a ningún título, con fines de explotación económica, tierras o concesiones en zonas de seguridad nacional, cuya delimitación corresponde al Presidente de la República.

Limita el uso del poder, en el Art. 23 No. 2, al señalar que los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia serán imprescriptibles, no sujetos a indulto o amnistía y que la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten.

Entre las garantías constitucionales se introducen: la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y dentro de éste la asistencia obligatoria de los abogados, la motivación de las resoluciones del poder público y la invalidez de pruebas obtenidas con violación de las garantías.

Pero respecto a la Fuerza Pública, la innovación consiste en que el Art. 186 de la Carta Política reconoce para los miembros de aquella, una aparentemente tautológica, pero necesaria afirmación, en cuanto, “Tendrán las mismas obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que establecen la Constitución y la ley.” Concomitante, el Art. 272 establece la prevalencia del precepto constitucional y la escala jerárquica de las normas, con la precisión de que, “Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y

autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior.”

En el Art. 81 señala que, “No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por las otras causas expresamente establecidas en la ley”, lo que concuerda con el derecho que el Art. 94 reconoce para toda persona, “A acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre si misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito...La ley establecerá un procedimiento especial para acceder a los datos personales que consten en los archivos relacionados con la defensa nacional”

El Art. 97 que establece los deberes y responsabilidades que tendrán todos los ciudadanos, cuya enumeración evidencia que el manejo del Estado y sus organismos, no es algo que incumbe únicamente a los funcionarios públicos, sino que asigna a aquellos, un rol más protagónico en el control y exigencia del correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

El Art. 119 que enmarca las iniciativas y gestiones del órgano

público y sus autoridades, únicamente en las atribuciones, “Consignadas en la Constitución y en la Ley”, precepto que es la línea demarcatoria entre el derecho público y el privado.

El Art. 181 que enuncia, las atribuciones del Presidente, en estado de emergencia. Y el El Art. 183 precisa las misiones de la Fuerza Pública, orientando las misiones de las Fuerzas Armadas hacia la Defensa, y las de la Policía, hacia la Seguridad.

Es necesario inaugurar un periodo de control constitucional, para profundizar la institucionalización, profesionalización, constitucionalización y juridización de la Fuerza Pública, lo cual redundará en un incuestionable beneficio para la vida jurídica del Ecuador, sin omitir que si los fines primordiales del derecho son la justicia y la seguridad jurídica, ésta es la expresión mayor de la seguridad física a la que tiene derecho todo ser humano.

Ponencia presentada en el Seminario “Orden Jurídico, Defensa, Seguridad y Democracia” realizado en Quito el 9 y 10 de junio del 2003.

*Dr. En Jurisprudencia. Coronel (r) de la Fuerza Terrestre.

OPINION

¿Cree usted que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen las mismas funciones y responsabilidades o que por el contrario cada una tiene sus funciones y responsabilidades definidas?

CUADRO N° 1

	TOTAL	Provincia		Sexo		N.S.E.			Edad				
		Guayas	Pichincha	M	F	A/B	C	D	18 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	+ de 55
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
No tienen las mismas funciones y responsabilidades	64,46	60,64	68,27	66,67	62,25	70,27	64,14	63,92	66,67	64,46	63,30	60,23	68,06
Sí tiene las mismas funciones y responsabilidades	35,64	39,36	31,73	33,33	37,75	29,73	35,86	36,08	33,33	35,54	36,70	39,77	31,94

Cree usted que se debería modernizar a las Fuerzas Armadas?

CUADRO N° 2

	TOTAL	Provincia		Sexo		N.S.E.			Edad				
		Guayas	Pichincha	M	F	A/B	C	D	18 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	+ de 55
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
SI	91,77	95,18	88,35	91,16	92,37	86,49	91,72	92,41	87,96	92,56	96,33	92,05	88,89
NO	8,23	4,82	11,65	8,84	7,63	13,51	8,28	7,59	12,04	7,44	3,67	7,95	11,11

MARKET. Investigación realizada durante los días 25 y 26 de octubre.

Muestra: 640 entrevistas (Pichincha y Guayas).

Confianza: 95%

Margen de Error: +/- 2.8 %

FOROS SOBRE TEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, CON EL CONGRESO NACIONAL

Entre junio y noviembre de 2003 se desarrolló una intensa actividad académica y de debate patrocinada por el Congreso Nacional y el Proyecto Relaciones Civil-Militares PUCE sobre temas que conciernen a la conducción constitucional de la defensa nacional. El Economista Guillermo Landázuri inauguró los Foros “Orden Jurídico, Defensa, Seguridad y Democracia” (junio 9 y 10) y “Estado Constitucional y Fuerzas Armadas” (septiembre 2) mientras el diputado Ramiro Rivera, Vicepresidente del Congreso, hizo lo propio con el Seminario “Gestión Democrática del Presupuesto y Gasto Militar” (octubre 29). Participaciones destacadas tuvieron los diputados Luis Fernando Torres, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jaime Estrada, Presidente de la Comisión de lo Tributario, Fiscal y Bancario y Carlos Vallejo, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa. Otros legisladores, académicos, juristas y militares contribuyeron con ponencias y comentarios especializados. Los eventos tuvieron lugar en el Auditorio Mayor del Centro Cultural de la PUCE.

Invitados internacionales fueron: Gustavo Suárez Pertierra, ex Ministro de Defensa de España; Louis Goodman, Decano de School of International Service de la American University; Vicealmirante (r) Jorge García, de la Armada de Argentina., Jaime



Panel N° 1 La Transición Democrática en la Constitución y las Leyes Ecuatorianas

Garreta, actual Viceministro de Defensa de Argentina, Ec. Gustavo Sibilla, Asesor del Senado argentino y Director del Proyecto Latinoamericano de Análisis de Presupuesto Militar de RESDAL. Con ocasión del Foro “Estado Constitucional y Fuerzas Armadas” se contó con la presencia de los Presidentes de Comisiones de Defensa de los Congresos de España, Argentina y Perú: Diputados Jordi Marsal, Jorge Villaverde y Luis Iberico, respectivamente. El

Presidente del Congreso ecuatoriano y los legisladores los recibieron en una sesión especial, el 2 de septiembre. Un detalle de los temas y debates tratados es el siguiente:



SESION INAUGURAL SEMINARIO “Orden Jurídico, Defensa, Seguridad y Democracia” Junio 9/10 - 2003.

SEMINARIO “ORDEN JURÍDICO, DEFENSA SEGURIDAD Y DEMOCRACIA”. Quito, 9 y 10 de junio / 2003. “La Transición Democrática en la Constitución y las Leyes Ecuatorianas” “La Perspectiva Democrática de la Seguridad: Debates sobre Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana; Defensa Civil”. “Ciudadanía y Fuerzas Armadas: Los Derechos Humanos desde y hacia las Fuerzas Armadas”. “Unidad Jurisdiccional y Legislación Militar”.

SEMINARIO TALLER “ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUERZAS ARMADAS”. Quito, 2 y 3 de septiembre / 2003. “Experiencias Constitucionales en la Gestión Democrática de la Defensa y Seguridad en Iberoamérica”. “Hacia un Modelo de Gestión Legislativa en Defensa y Seguridad”.

SEMINARIO “GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEL PRESUPUESTO Y GASTO MILITAR”. Quito, 29 de octubre / 2003. “El papel del Congreso en la Gestión Democrática del Gasto Militar”. “Análisis del Presupuesto de Defensa en Ecuador”. “Metodología de formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto de Defensa”. El diputado Luis Fernando Torres, Presidente de Asuntos Constitucionales, participó en el Seminario Taller “La acción Parlamentaria en la Defensa Nacional”, organizado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina – RESDAL, Buenos Aires, del 4 al 6 de noviembre, 2003.

PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON FUERZAS ARMADAS, EN TRAMITE LEGISLATIVO

Investigación realizada por José Castro S. Contiene los Proyectos de Ley sobre de Fuerzas Armadas, presentados al Congreso Nacional en el período 1989 –2003.

FUENTE: PROLEG - Archivo del Congreso Nacional

CODIGO	LEY	PERIODO	AUSPICIANTE	PARTIDO	ULTIMO TRAMITE	FECHA m/d/a
21-480	INDEMNIZACION A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SERVICIO ACTIVO QUE SUFRAN DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES Y DE INDEMNIZACION A SUS FAMILIARES EN CASO DE MUERTE.	1998-2000	Julio Noboa Narváez	ID	Primer Debate	02/01/01
22-558	SUSTITUTIVA A LA LEY RESERVADA N°. 01, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N°. 2347-R, DE FEBRERO DE 1995. REGALIAS DEL PETROLEO A LAS FUERZAS ARMADAS.	2000-2002	Función Ejecutiva-Urgente		Registro Oficial Reservado FFAA	12/12/00
23-913	REFORMATORIA A LA LEY DE SERVICIO CIVICO OBLIGATORIO AL AMPARO DE LAS FUERZAS ARMADAS.	2000-2002	Cecilia Calderón Prieto	ID	Distribución	10/03/02
24-031	* REFORMATORIO A LA LEY DE SERVICIO CIVICO OBLIGATORIO AL AMPARO DE LAS FUERZAS ARMADAS.	2003/2005	Renán Borbúa Espinel	PSP	Distribución	03/17/03
1-92-155	REFORMATORIO A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.	1992-1993	Presidente de la República		Registro Oficial 199	05/28/93
I-96-013	EXONERACION PAGO DE TASAS POR SERVICIOS AGUA POTABLE, LUZ ELECTRICA PARA HOSPITALES, CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD, DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL, JUNTA BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL, SOLCA, CRUZ ROJA PROVINCIAL Y CANTONAL.	1996-1997	César Acosta Vásquez	PSC	Presentación	08/13/96
I-96-172	REFORMATORIA A LA LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES.	1996-1997	Guillermo Hidalgo Bifardi	FRA	Presentación	12/17/96
I-97-305	REFORMATORIA DE LAS LEYES ORGANICAS Y DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.	1996-1997	Función Ejecutiva Ordinario		Registro Oficial182	10/28/97
II-98-314	REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	1997/1998	Juan José Illingworth	Ind.	Presentación	04/07/98
III-95-231	PENSION VITALICIA A LOS HEREDEROS DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE HAN FALLECIDO EN COMBATE CON MOTIVO DE LA AGRESION PERUANA.	1994-1995	Marco Proaño Maya	PRE	Registro Oficial 666	03/31/95
III-95-233	PENSION VITALICIA EN FAVOR DE LAS CONYUGES Y HEREDEROS DE CADA MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS FALLECIDOS EN ACCIONES DE GUERRA EN DEFENSA DE LA PATRIA.	1994-1995	Luis Almeida Mora	PSC	Presentación	02/16/95
III-95-234	PENSION VITALICIA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS Y SUS FAMILIARES EN VIRTUD DEL CONFLICTO BELICO CON EL PERU.	1994-1995	Araceli Moreno Silva	MPD	Presentación	02/17/95
IV-96-249	REFORMATORIA A LAS LEYES ORGANICA Y DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.	1995-1996	Función Ejecutiva -Ordinario		Segundo Debate	07/02/96
IV-92-067	SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	1991/1992	Presidente de la República		Registro Oficial 995	08/07/92
II-89-060	LEY DE JUSTICIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. (RESERVADO)	1989-1990	Carácter Reservado	PRE	Presentación	03/31/95

* Extracto de la Ley – Registro Oficial N-50 del 03/28/03



NOTAS DESTACABLES DE LAS FUERZAS ARMADAS FUERZA AÉREA ECUATORIANA (FAE)

En el mes de Octubre la Fuerza Aérea Ecuatoriana celebra su 83 Aniversario de Fundación. El Boletín "Defensa, Seguridad y Democracia" destaca, con esta ocasión, sus perfiles profesionales más relevantes.

COMANDANTE GENERAL. Brigadier General Ángel Gilberto Córdova Carrera (desde el 15 de enero de 2003)

JEFE DE ESTADO MAYOR: Brigadier General Luis Hernán Ayala Salazar.

DIRECTOR DE OPERACIONES: Brigadier General Luis Eduardo Carrera Cordero.

INSPECTOR GENERAL: Brigadier General Edmundo Marcelo Baquero Madera.

DIRECTOR DE MATERIALES: Brigadier General Jorge Eduardo Moreno Artieda.

DIRECTOR DE PERSONAL: Brigadier General Jorge Humberto Andrade Lara.

COMANDANTE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE: Brigadier General Vladimiro Eugenio Pérez Gaybor.

COMANDANTE DEL COMANDO DE LA DEFENSA AÉREA: Brigadier General Héctor Hugo Camacho Pauta.

COMANDANTE DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE: Brigadier General Rodrigo Germánico Jarrín Durango.

HISTORIA

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) es la más joven de las tres ramas de las Fuerzas Armadas del país, con una trayectoria de constante superación dentro de su misión fundamental de mantener el control del espacio aéreo y contribuir junto con las otras ramas de las Fuerzas Armadas a garantizar la soberanía e integridad del Estado Ecuatoriano.

El 27 de octubre de 1920, el Presidente José Luis Tamayo emitió el Decreto de creación de dos escuelas de aviación militar, localizadas la una en Quito y la otra en Guayaquil. El 31 de diciembre de 1933 se constituyó en organismo independiente de las Fuerzas Armadas. Fue su primer comandante el Mayor Bayardo Tobar, antes Inspector General de Aviación del Ejército.

En mayo de 1946 la FAE inició la aviación de Combate en el Ecuador. En 1978 se incorporan los primeros aviones supersónicos. En 1982, con la adquisición a Israel de los aviones Kfir C-2 se marca un cambio tecnológico fundamental en la aviación militar ecuatoriana: se desarrollan nuevas tácticas de empleo del poder aéreo y se avanza en los campos de la electrónica, sistemas de radares y motores. El 10 de febrero de 1955, durante el conflicto del Alto Cenepa, protagonizó el primer combate aéreo en Sudamérica, con resultados victoriosos para la FAE.

UNIDADES PRINCIPALES Y SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-PROFESIONALES.

COMANDO AÉREO DE COMBATE (COMAC): Ubicado en Guayaquil. Su función es planificar y ejecutar las operaciones aéreas, a través de las Alas de Combate N°s. 21, 22 y 23.

COMANDO DE LA DEFENSA AÉREA (COMDA). Formado por tres Centros de Operaciones Sectoriales: COS 1, COS 2 y COS 3, ubicados en Guayaquil, Tena y Ambato. Su función es la defensa del espacio aéreo por sistema de radares.

ALA DE COMBATE N° 21 (TAURA). Es el más importante reparto de la FAE. Posee aviación supersónica, aviones JAGUAR MK-1, MIRAGE F-1 y KAFIR C2/C3. Altamente adiestrada para cumplir misiones en tiempos de paz, entre otras: Supresión de Defensas, Barredura de Cazas, Interceptación, Escolta y Combate electrónico.

ALA DE COMBATE N° 22. Cuenta con helicópteros BELL-212, ALO-HUETTE y TH-57. Se prepara para misiones de Rescate en Combate (recuperación de tripulaciones). En tiempo de paz esta Ala de Combate desempeña un papel muy importante pues se encarga de la Búsqueda y Salvamento de aeronaves civiles y militares dentro del territorio ecuatoriano, misión constitucional encomendada a la FAE.

ALA DE COMBATE N° 23. Compuesta por aviones subsónicos de combate A-37B y MK-89. Sus principales misiones en caso de guerra son las de Apoyo Aéreo Aproximado (en apoyo a fuerzas de superficie). Requiere una alta experticia en coordinación en tiempo y espacio con las fuerzas apoyadas. Interdicción y Reconocimiento.

ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN "COSME RENELLA B" (ESMA) Forma oficiales pilotos y técnicos de la FAE. Tiene los aviones de entrenamiento T-34C y avionetas A-150.

ALA DE COMBATE N° 31. Apoya a la custodia de la frontera norte (con Colombia)

ALA DE TRANSPORTES N° 11. Su misión es transportar tropas y abastecimientos en el teatro de operaciones. Contribuye a potenciar la movilidad de las unidades de combate.

ALA N° 12. Su función es la investigación y desarrollo aeronáutico. Forma al personal de aerotécnicos en el ITSA.

ACADEMIA DE GUERRA AÉREA (AGA). Perfecciona a los oficiales de la FAE en todas sus especialidades.

BASES IMPORTANTES DE LA FAE

MARISCAL SUCRE (Quito)	MANTA*
SIMON BOLIVAR (Guayaquil)	SALINAS
COTOPAXI	LAGO AGRIO (Región
TAURA	Amazónica)

* **LA BASE AÉREA DE MANTA** proporciona entrenamiento a los pilotos de combate. En ella opera la aviación subsónica de la FAE. En cumplimiento a los convenios internacionales firmados por el Estado ecuatoriano, apoya a las operaciones de control del narcotráfico realizada por aeronaves norteamericanas.

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO.

La FAE apoya al desarrollo del país, a través de instituciones como TAME, DIAF, EMSA. Un objetivo básico es integrar a las localidades aisladas del país.

LA DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA (DIAF) Presta servicios especializados en mantenimiento de aviones, tanto civiles como militares. Tiene calificaciones de la FAA como estación reparadora internacional en técnicas de aviones en general, motores y servicios especializados. TAME. Creada el 16 de mayo de 1962 para enlazar ciudades pequeñas con los centros de desarrollo urbano. Moviliza un total de 3.500 pasajeros por día. En 1996 inició sus servicios al exterior con destinos a Cuba, Chile y Panamá. Actualmente cuenta con una moderna flota de dos AIR-

BUS A320, cuatro Boeing 727-200, tres Boeing 727-100, un Focker F-28-4000. Dos Avro 748 y un DHC-6 Twin Otter atienden los servicios de menor demanda.

No se pueden comparar con el total de los recursos presupuestados. "Con este argumento, el Ministerio de Defensa tendrá una disminución de un 23% en sus ingresos –añadió Herrera. Las acciones en la frontera norte (con Colombia) y los planes conjuntos que se realizan en la Base de Manta, son los argumentos que utilizaron para rechazar esta medida. A pesar de todo, Herrera señaló que se mantienen en el Presupuesto de Defensa los \$65 millones de autogestión aportados por Fuerzas Armadas (El Comercio 14/02/03).

CRONOLOGIA. FUERZAS ARMADAS - SOCIEDAD

CAMBIO DE CÚPULA MILITAR

* A inicios del mes de enero de este año, la confrontación del frente militar fue uno de los hechos de mayor interés al inicio del nuevo gobierno. El triunfo del presidente Gutiérrez confrontó a la antigua cúpula militar con quienes fueron reprimidos a partir del 21 de enero del año 2000. Este antecedente concitó la atención pública en torno a los cambios producidos en la cúpula militar.

* El Congreso Nacional (la Comisión de Asuntos Constitucionales) interrogó al Ministro de Defensa, Nelson Herrera, sobre estos hechos (El Comercio 11/02/03).

* Herrera defendió la constitucionalidad de los nombramientos y dijo que se enmarcaron "dentro de la constitución" y que "la designación del Alto Mando es privativa del Presidente de la República" (El Comercio 03/02/03)

* A partir del 15 de enero las FFAA cuentan con 29 oficiales en su lista de generales y almirantes: 13 del Ejército, 8 de la Marina y 8 de la Fuerza Aérea (sin contar el retiro de Oswaldo Jarrín de la comandancia de las FFAA que se produjo a finales del mes de junio) (Hoy 21/01/03)

PRESUPUESTO

* Febrero estuvo marcado por la discusión de la proforma presupuestaria. El presupuesto para el año 2003 tenía como objetivo no rebajar las asignaciones para áreas sociales y de salud. Este condicionamiento tuvo un consenso al interior del legislativo y fue la pauta que marcó la revisión de los presupuestos para defensa y deuda externa, según lo manifestó el Presidente del Congreso, Guillermo Landázuri (El Comercio 07/02/03).

* El Ministro de Economía, Mauricio Posso, señaló que existía un aumento del 40.47% del monto en el presupuesto de las FFAA, dato que fue desmentido por Herrera aduciendo que el aumento del monto presupuestario se debe al "dinero adeudado en el 2002". El "error de comparación", como fue calificado el porcentaje de Posso, fue explicado por el Comandante General de la Armada, Víctor Hugo Rosero, quien señaló que los recursos fiscales

PRESENCIA DE MILITARES EN ADUANAS

* La presencia de las FFAA en la administración de las entidades del Estado u otras organizaciones responde a lo que ellos llaman "aporte al desarrollo nacional" (El Comercio 23/01/03). Esta visión fue recogida por el Presidente de la República quien impulsó, a través de un proyecto de ley (insinuado desde el 20 de enero) la "militarización" de las Aduanas en el mes de marzo.

* El diputado Luis Fernando Torres, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, rechazó la propuesta del Ejecutivo y presentó un informe donde señaló que la presencia militar en esta área de control era inconstitucional (El Comercio 06/03/03). El Congreso presentó también un informe en donde recomendó al Ejecutivo "cambie la transitoriedad de las FFAA en las Aduanas", puesto que esa palabra no determinaba un tiempo exacto (El Comercio 01/04/03).

* Finalmente, en abril, la recomendación del Congreso fue acogida y se fijó un plazo de 180 días (exactamente 6 meses) para la prestación de ese servicio (El Comercio 03/04/03). Oswaldo Jarrín, Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, dijo que las acciones que los militares desempeñarán en Aduana son las de capacitación, entrenamiento, tecnificación y reestructuración del Servicio de Vigilancia Aduanera (SAV) (Hoy 03/04/03).

EXPLOSIONES Y ACCIDENTES EN DEPÓSITOS DE ARMAS (POLVORINES)

* El 20 de noviembre del 2002 la ciudad de Riobamba fue sorprendida por la explosión del polvorín de la Brigada Galápagos, ubicada dentro de la ciudad. Con este hecho, el país recordó la explosión del polvorín de la Balbina, en el sector de Amaguaña, el 5 de julio de 1997. En febrero de este año se produjo el incendio del submarino Shiry de la Marina (El Comercio 03/02/03). En marzo se registró la explosión de una granada en la Isla Puná (cerca de Guayaquil) que causó 5 muertos y heridas a dos niños; la Marina admitió que el accidente fue producto de una negligencia de su parte (Hoy 02/03/03). En la Base Naval Sur se registró otra explosión de un polvorín que consternó a la población cercana (El Comercio 24/03/03). La opinión pública reaccionó negativamente a estos sucesos, llegando a criticar el nivel profesional de las FFAA lo que ha afectado su imagen institucional (El Comercio 30/03/03).

* El tema se empezó a tratar en el Congreso Nacional cuando Hugo Unda era Ministro de Defensa (diciembre del año pasado). Nelson Herrera, actual Ministro de esta cartera, respondió a las preguntas que legisladores tenían sobre los resultados de los informes de la Comisión Evaluadora y de Inspectoría del Ejército sobre los incidentes ocurridos meses atrás en unidades militares.

* También respondió a la información proporcionada por el suboficial Euclides Bonifaz, técnico de la Fábrica de Municiones Santa Bárbara, quien dijo que habían 2 920 granadas de las 10. 140 que supuestamente debían existir (El Comercio 02/04/03). Con este dato el diputado Guillermo Haro sustentó su informe donde asegura que la explosión fue provocada con el fin de ocultar la fuga

de armas desde las bodegas militares hacia las FARC. El informe del diputado vincula este hecho a Carlos Seas, detenido por la Policía por venta de armas. Herrera manifestó que todas las pruebas deben ser enviadas a un juez y agregó que ya existen pruebas que exculpan a las FFAA de la responsabilidad del incidente, pero no presentó ninguna.

* Estos incidentes motivaron el tratamiento de una Ley de Tenencia de Armas, en el mes de marzo. La intención de la Ley es buscar la reubicación de los polvorines de las FFAA y establecer mecanismo de control en el manejo del equipo militar especializado. El objetivo es que los polvorines sean trasladados en el plazo de un año, sin embargo el gobierno insistió en la carencia del dinero necesario para el traslado.

* El Plan de Reubicación de los Polvorines de las Fuerza Terrestre, auspiciado por la comandancia de esa rama, es la primera respuesta a la Ley tramitada por el Congreso: la segunda etapa que se cumplirá hasta el año 2006, es la construcción de 20 polvorines fuera de los centros urbanos, para lo cual se ha establecido un presupuesto de \$69 millones.

AMNISTÍA A LOS MILITARES IMPLICADOS EN EL GOLPE DE ESTADO DEL 21 DE ENERO

* La petición del presidente Lucio Gutiérrez de otorgar perdón a los militares que participaron el 21 de enero (El Comercio 22/06/03) pasó a ser analizada en el Congreso Nacional. Son 461 militares los implicados en el Golpe de Estado: 367 oficiales: 22 coroneles, 127 tenientes coroneles, 15 mayores, 48 capitanes, 152 tenientes, y un subteniente; y 94 de tropa: 13 sargentos, 80 cabos y un soldado. El diputado Ramiro Rivera (Vicepresidente del Congreso) rechazó la suspensión de sanciones para los protagonistas del 21 de enero del 2000.

* El Consejo de Generales, formado por los 11 generales más antiguos de la Fuerzas Terrestre, suscribió el informe sobre el pedido presidencial. El Ministro de Defensa, Nelson Herrera, lo entregó al Presidente bajo estricta reserva (Hoy 02/07/03).

* El general Luis Aguas, Comandante de la Fuerza Terrestre, dijo que en el informe no existe ninguna resolución a favor o en contra, sino recomendaciones. Pero trascendió que existieron posiciones en el Consejo de no levantar las sanciones con el fin de preservar la disciplina y la estabilidad institucional. Herrera reiteró que "la disciplina y los principios legales están por sobre todas las cosas en FFAA" (Hoy 04/07/03). Por otra parte, el Congreso aprobó una resolución que exhorta al presidente Gutiérrez a mantenerse alejado de las decisiones que se tomen en las FFAA, y aclaró que la amnistía concedida por el Congreso en mayo del 2000 era de los delitos civiles y penales, no los de carácter multinacional.

* La amnistía no fue aprobada puesto que no se encontró suficientes argumentos para levantar las sanciones. Frente a este resultado Herrera dijo que no ha afectado la estructura de las FFAA: "la tensión ha disminuido". Además aclaró que los militares sancionados están cumpliendo labores de acuerdo a su jerarquía y que no están impedidos de ascender (siempre y cuando el puntaje sea el requerido) (El Comercio 12/07/03).

LEGISLACIÓN MILITAR

* El tema de la Unidad Jurisdiccional provocó cambios en la legislación militar. El 23 de mayo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el inciso segundo del art. 198 de la Ley de Personal

de las FFAA, que dice que en caso de ser sentenciados con privación de libertad, los militares cumplirán la sentencia "al interior de los Centros de Rehabilitación Social Militar o en unidades castrenses". Esta disposición va en contra del artículo 208 de la Constitución que manifiesta que las personas condenadas por castigos comunes "cumplirán la pena en los Centros de Rehabilitación del Estado". Esto se aplicará tanto en los autos de prisión preventiva, como en las sentencias dictadas por la justicia ordinaria, contra miembros de la fuerza pública por infracciones fuera de sus funciones. (El Comercio 15/06/03)

CORRUPCIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y ENFRENTAMIENTO CON EL CONGRESO

* El descubrimiento en la ciudad de Quito por parte de la Policía de una bodega clandestina de armas, de las cuales el 10% pertenecen al Ejército, (El Comercio 27/08/03) produjo un conflicto entre el Legislativo y las FFAA. Las increpaciones y demandas por parte del diputado Guillermo Haro, provocaron que el Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Octavio Romero, quien comparecía ante el Pleno Legislativo para explicar las auditorías que, a raíz del informe policial, se realizaron al interior de las distintas unidades militares, saliera intempestivamente del recinto congresal. Romero justificó su acción aduciendo que el diputado Haro no demostró "apertura, respeto y consideración" y que no iba a permitir que la "majestad de las FFAA sea mancillada" (El Comercio 12/10/03).

* El Presidente Gutiérrez lamentó el incidente entre el Congreso y la cúpula de las FFAA. No obstante, rechazó las imputaciones del diputado Guillermo Haro diciendo que "desean desprestigiar a las FFAA". Lo acusó de esconderse tras su inmunidad parlamentaria para hacer acusaciones sin fundamento (Hoy 22/10/03).

* En el mes de octubre el conflicto entre las FFAA y el diputado Haro se profundizó. Las FFAA iniciaron dos procesos judiciales contra Haro: el primero es una demanda civil de indemnización pecuniaria por "haber manchado la reputación de la institución militar" y determina una suma no menor a \$10 millones. La querella fue presentada el 15 de octubre en la Corte de Quito quien debe decidir si continúa el proceso. El segundo juicio fue presentado el 29 de octubre por el Ministro de Defensa y la Cúpula Militar, ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo. El Ministro pidió, en su demanda penal, que se enjuicie a Haro por calumnias injuriosas graves.

* El Ministro Nelson Herrera, dijo que la inmunidad parlamentaria que protege a Haro sólo es pertinente "cuando vierten opiniones legislativas". Pero esta interpretación no es acorde con el art. 137, y no puede ser aplicada porque el diputado hizo las acusaciones en calidad de fiscalizador. Según FFAA, Haro ha estado desprestigiando a las FFAA desde el 20 de noviembre del 2002, cuando sucedió la explosión en Riobamba, y lo ha hecho sin pruebas. Mientras tanto, Haro se reunía con la Comisión de Transparencia que investiga el robo de armas de las bodegas militares desde el 30 de septiembre de este año, para presentar un informe que señala que desde noviembre de 2002 en las FFAA existe un robo sistemático de armas para venderlas a las FARC. Señaló que la explosión en Riobamba fue provocada para ocultar este tipo de actos ilícitos (El Comercio 29/10/03)

* Según el Comandante del Ejército, Luis Aguas, la cercanía del conflicto colombiano hace que miembros de las FFAA se involucren en este tipo de actos ilícitos. El armamento pasa a Colombia por 23 pasos ilegales que los militares no han podido controlar totalmente.

FRONTERA NORTE

* El conflicto armado que vive Colombia ha provocado que Ecuador tome medidas de protección cada vez más prolijas en la frontera. El desempeño de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ha sido efectivo. Así, las acciones conjuntas se han convertido en un punto esencial en la agenda de seguridad que los dos países ponen en práctica para proteger los 600 Km. de frontera (El Comercio 16/01/03) (Hoy 21/10/03). Cualquier colaboración no significa que Ecuador forme una "fuerza binacional" manifestó el entonces Jefe del Comando Conjunto, Oswaldo Jarrin (Hoy 19/02/03).

* Desde el 2000, FFAA iniciaron una redistribución de personal y armamento desde las bases ubicadas al sur del país, hasta la frontera norte, en base al Plan Estratégico del Comando Conjunto (Comaco), frente a las actividades de grupos irregulares en la frontera norte que representan una "amenaza asimétrica". La zona de riesgo comprende las Provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbios, en donde 16 bases militares están atentas a las acciones en la zona fronteriza con Colombia. (El Comercio 14/03/03).

* La acción militar se extiende al control migratorio. El 5 de mayo el Presidente Gutiérrez decretó el "límite de circulación" de personas y vehículos, a lo largo del cordón fronterizo, El Decreto, apoyado por la Cancillería, vino luego de la crítica del gobierno de EEUU sobre el control de grupos irregulares y la "porosidad" de las fronteras (El Comercio 07/05/03). El arribo de 1 500 personas desplazadas desde Colombia, a la parroquia Julio Andrade, en la ciudad fronteriza de Tulcán, es una muestra del flujo migratorio que afecta al país, y de sus consecuencias, que motivaron la militarización del sector (El Comercio 21/10/03).

* El control del contrabando y el tráfico de armas y drogas en la frontera es difícil. Solamente entre la Provincia del Carchi (Ecuador) y Nariño, existen 22 pasos ilegales (El Comercio 18/06/03). Se ha fortalecido el control a través de planes opera-

cionales en todas las provincias: El Comando de Operaciones Norte de Esmeraldas elaboró un plan estratégico para cubrir la zona de San Lorenzo y controlar los índices de violencia que han aumentado en un 50% desde el 2002 (El Comercio 23/06/03). Los patrullajes cerca del río San Miguel descubrieron sembríos de coca y supuestos asentamientos de las FARC en territorio ecuatoriano (El Comercio 05/10/03). El acuerdo entre Brasil y Ecuador para mejorar la vigilancia aérea y el intercambio de información sobre el tráfico de drogas, refuerza la posición de las Fuerzas Armadas (El Comercio 03/11/03).

* Se redujo la ayuda militar de los USA para el próximo año, porque Ecuador no firmó el convenio de inmunidad ante la CPI, de los soldados estadounidenses (El Comercio 02/07/03). Ecuador perderá \$1,65 millones en ayuda militar de ese país (Hoy 03/07/03).

OPERATIVOS CONJUNTOS: FFAA – POLICIA

* Ante el aumento de la delincuencia, desde febrero se iniciaron operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas en las 22 provincias del país. Las FFAA pusieron 2 000 efectivos y las Policía 21 000 (El Comercio 10/02/03). El Comandante de la Policía (Edgar Vaca) dijo que "no hay que tener demasiada expectativa", puesto que los militares "están entrenados para la guerra y no para la seguridad ciudadana". "la intervención de los militares es una solución tangencial "que no resolverá el problema de fondo". Los militares recibieron capacitación en procedimientos antimotines y en legislación. La ejecución del proyecto estuvo a cargo de los jefes provinciales y de la dirección de los comandantes de la Policía y las FFAA (El Comercio 10/02/03)

* Para varios analistas, estas acciones son erróneas. Simón Pachano (El Universo) manifestó que las FFAA están hechas para contrarrestar a un enemigo externo, atacarlo y acabarlo, "la debilidad de la Policía no se puede suplir con la entrada de los militares" (Hoy 09/02/03).

BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD, DEFENSA

Comité Editorial:

Bertha García Gallegos

Fernando Bustamante Ponce

Francisco Rhon Dávila

Asesores Internacionales:

Louis Goodman – American University (USA)

Gustavo Suárez Pertierra – Instituto Gutiérrez Mellado
(España)

Investigación:

José Castro Sotomayor

Relaciones Públicas

Inés Cevallos Breilh

Apoyo Técnico

Ing. Silvia García González

BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD, DEFENSA

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria

Universidad Católica. Torre 2, piso 9. Oficina
901

Teléfonos:

(593-2) 299 1582

(503-2) 256 5627 ext. 1124

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec

<http://www.dsdpuce.org>

Correspondencia y solicitud de ejemplares
del boletín:

jrcastro@puce.edu.ec